

Crisis, elecciones y lucha por la democracia

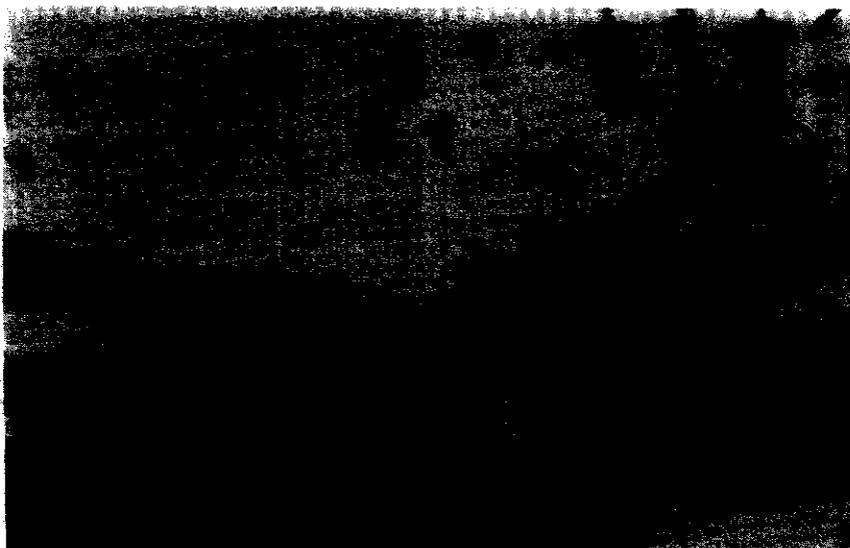
Taller de discusión
política por la
democracia y el
socialismo: Antonio
Rojas Nieto, Miguel
Angel Rivera, Raúl
Fuentes, Alfonso
Hernández, *et al.**

Presentación

El presente documento trata de analizar la actual coyuntura electoral en el contexto de la crisis económica, social y política que vive México. También, delinear algunas actividades concretas a ser impulsadas por los núcleos más inmediatos que suscriben este documento planteadas al resto de la izquierda. Pero, por encima de todo, constituye un esfuerzo de reflexión sobre la crisis actual de la izquierda mexicana y algunas posibles líneas de acción que pueden ayudar a su superación.

El estallido de la crisis política del Estado Mexicano, ha dejado también al desnudo la orfandad teórica, social y política de la izquierda y del conjunto del movimiento socialista y revolucionario. Hasta hace poco eran ya evidentes dos causas de esa crisis, que estaban dadas por su escasísima vinculación con el movimiento social de los trabajadores y del pueblo mexicano y por la pérdida de los referentes teóricos e históricos que la unieron en alguna época a la tradición y problemática actual del socialismo internacional. Con el advenimiento de la crisis política, también ha pasado a ser evidente un hecho ya presente desde bastante antes, pero menos visualizable. Nos referimos a la incompresión de la dinámica propiamente nacional de la evolución histórica de México, a su expresión en términos de crisis económica, social y política y a las posibilidades que abre para la democratización del

* Al presente documento se le ha suprimido la parte correspondiente a las organizaciones políticas participantes en las elecciones del 6 de julio de 1988; tal supresión obedece a razones de espacio editorial y a la necesidad de revalorar el proceso de recomposición de fuerzas políticas y sociales que se abre en el país a partir de dicha fecha. En lo demás, se ha optado por preservar el texto original en el entendimiento que el análisis realizado es vigente.



Estado y la sociedad mexicana y el desarrollo de un nuevo proyecto socialista adecuado a las condiciones de la época. Tal incomprensión, le ha impedido jugar un papel protagónico significativo en el actual proceso electoral, orillándola a adoptar tácticas de sobrevivencia individual o esfuerzos coyunturales de reagrupamiento en torno a la emergente candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y sus posibilidades de capitalizar el descontento social existente.

Ante esa coyuntura, el presente documento trata de fundamentar una línea de acción que conjugue tres objetivos: a) Destacar la importancia de la crisis política del régimen de dominación como medio para catalizar su transformación que garantice una verdadera apertura democrática, b) Aprovechar esa apertura en términos de expresión y organización autónoma del descontento social y la autorganización de la clase obrera y el movimiento popular; y c)

Avanzar en la convergencia estratégica de las fuerzas aún dispersas que se plantean construir un proyecto socialista moderno, anticapitalista y democrático, que recoja las aportaciones de los nuevos movimientos sociales y la crítica a las concepciones y prácticas de la vieja izquierda estatista, nacionalista y burocrática.

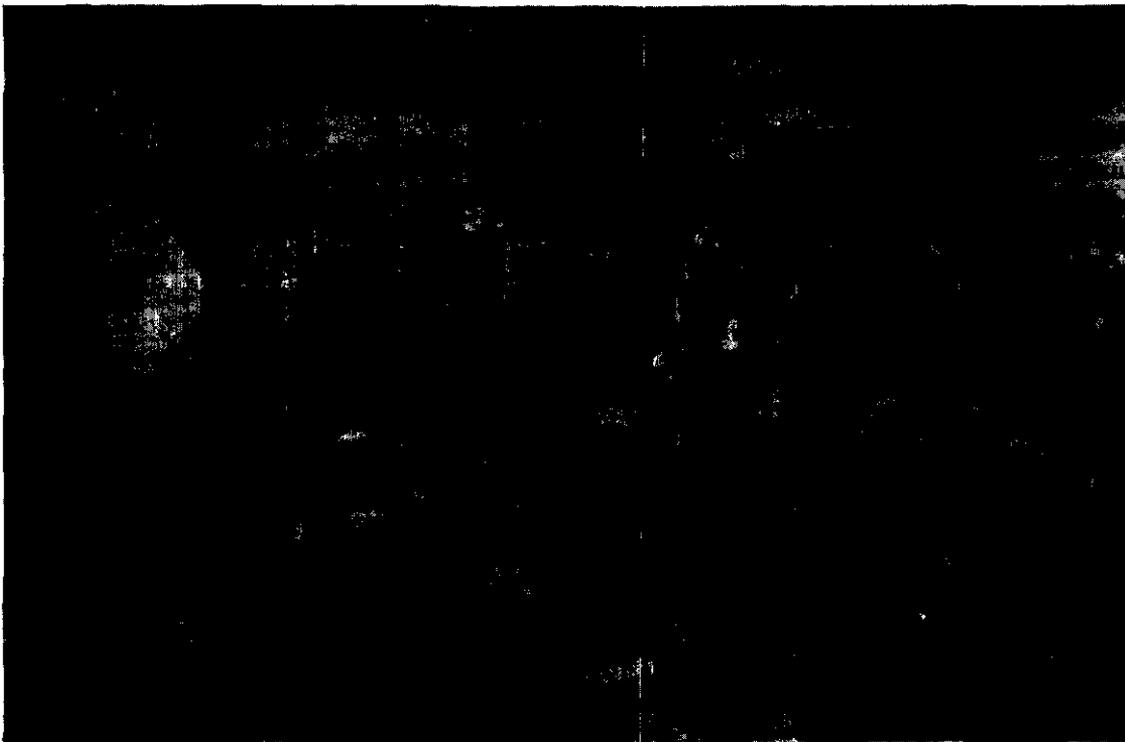
1. La crisis del capitalismo mexicano

México experimenta una de las más agudas crisis estructurales de su historia. Desde hace ya más de un lustro y medio ha concluido el largo ciclo de prosperidad que vivió el país desde los cuarenta y ha entrado en un nuevo periodo de estancamiento, que sólo ha podido ser mediatizado por efímeras recu-

peraciones alimentadas por el endeudamiento externo, la petrolización y el crecimiento inflacionario. Agotada a partir de 1982 la posibilidad de continuar creciendo artificialmente, ha aparecido desde entonces la verdadera cara de la crisis con sus trágicas secuelas económicas, sociales y culturales. Desde entonces resulta ya claro, que lo que vivimos es el agotamiento histórico de todo un estadio de desarrollo del capitalismo mexicano, sin haber podido superar las dificultades del pasaje a un primer estadio de crecimiento intensivo. Esto significa que a pesar de haberse comenzado a modificar los patrones

fundamentales de la acumulación y la organización del capital (predominio de las industrias pesadas, constitución de un moderno capitalismo monopolista-financiero etc.) no se ha logrado aún imponer en el país una verdadera dinámica de crecimiento intensivo basado en el elevamiento sostenido de la productividad del trabajo social y su traducción en una forma superior de organización de las relaciones sociales, la integración al mercado mundial y la dinamización del Estado.

En la ya larga crisis del capitalismo mexicano se encuentra presente el agotamiento de los patro-



Mitin cardenista, septiembre 1988. Foto: Ileri de la Peña

nes tradicionales económicos, político-sociales y culturales que hicieron posible en su momento el "milagro mexicano", pero que —ulteriormente— cuando se impuso la necesidad de pasar a modalidades más avanzadas de desarrollo económico, actuaron como factores retardatarios que estrangulaban ese tránsito. Tales patrones son mucho más que los "modelos de desarrollo" o las "políticas económicas" que se impusieron en las últimas décadas de la vida nacional, pues constituyen la expresión objetiva de las estructuras institucionalizadas de poder conformadas por décadas de desarrollo del capitalismo en el marco del régimen político surgido de la revolución mexicana.

La estrategia de desarrollo capitalista que hoy encontramos agotada, se caracterizó por haber impuesto en el plano económico, los siguientes patrones económicos: a) una estructura de mercado de carácter oligopólico, nacida en primera instancia de la sobreprotección del mercado interno, que actuó a la larga como un factor retardatario que desalentó la innovación tecnológica y el crecimiento progresivo de la productividad del trabajo; b) un sistema de intervención y regulación estatales establecido en función del subsidio al capital privado y el enriquecimiento de funcionarios y caciques, por medio de la intermediación burocrática y la asociación con grupos favorecidos de capitalistas (conformación de grupos de capital burocrático privilegiado); c) la transferencia del grueso de los recursos obtenidos por vía del endeudamiento externo, la explotación del campo o la renta petrolera en beneficio de la burguesía sobreprotegida que tuvo acceso a ganancias extraordinarias a costa de trabajadores y consumidores. Los esfuerzos del gran capital por sostener estas formas de funcionamiento más allá de sus límites de funcionalidad para el propio capi-

tal, fue lo que condujo al desmesurado endeudamiento externo, a la crisis fiscal crónica y a la consiguiente bancarrota del Estado, al crecimiento de la inflación o el derrumbe del empleo y de la capacidad adquisitiva del salario.

Estas estructuras económicas están asociadas a sistemas de dominación y a formas políticas de organización del Estado, que suelen agruparse bajo el rubro de "Estado social-autoritario" o "autocrático-corporativo", que consisten en esencia, como veremos, en la conjunción del control corporativo sobre la sociedad civil, la centralización autoritaria en torno al poder presidencial y el establecimiento de un partido de Estado como nexo entre el control corporativo y el poder presidencial, que actúa como instrumento de convalidación del poder estatal en el plano político-electoral. La consolidación de estas formas, no sólo fue el resultado de las necesidades políticas del sistema, sino también de la participación de la llamada burocracia política y los cuadros intermedios de la misma ("charros", caciques) en la apropiación de la riqueza social por medio de diferentes instancias o mecanismos: asociación con el capital privado, gestión de la empresa pública, institucionalización de la "mordida" etc. Si este sistema político pudo legitimarse socialmente y preservar su estabilidad a lo largo del tiempo, fue: a) porque pudo capitalizar en su favor los logros históricos de las reformas posrevolucionarias, de la industrialización y del establecimiento de un incipiente sistema de seguridad social; y b) porque pudo asimilar organizadamente a los líderes naturales de las principales fuerzas sociales y a muchos de los intelectuales más destacados del país. Pero por lo mismo, sólo podía tener legitimidad si podía continuar garantizando el desarrollo económico y social y asimilando al grueso de los elementos más diná-

micos de la sociedad. Si el estallido de la crisis económica estructural tendió a cerrar el primer canal de legitimación, el surgimiento de clases sociales modernas generadas por el propio desarrollo del capitalismo tendería a limitar la viabilidad de la segunda.

2. La reestructuración del capital en curso

En el marco de la crisis se han venido desarrollando esfuerzos del capital y el gobierno mexicano por superar ésta a través de una reestructuración global del mismo, que implica modificaciones fundamentales en sus normas de funcionamiento. Si bien se trata de un proceso interno que intenta remover los obstáculos específicos que frenan la recuperación de la rentabilidad y la acumulación del capital en el país, es también una parte de la reestructuración internacional del capital que está transformando al mundo entero, y que tiende a imponer sus condiciones al conjunto de los países.

Las líneas del desarrollo de la reestructuración internacional del capital condicionan la dirección del proceso mexicano en varios sentidos. La profunda revolución tecnológica en curso le impone la necesidad de asimilar nuevas técnicas, reconvertir una parte substancial de la planta industrial, desarrollar una nueva red de comunicaciones y efectuar importantes modificaciones en sus sistemas educacional y científico, y en la recalificación de la fuerza de trabajo. Pero esa exigencia va acompañada de otros imperativos en términos de internacionalización de los procesos productivos, espacios comerciales y circuitos financieros, así como del reforzamiento de la capacidad competitiva de las distintas economías nacionales en el mercado mundial cuyo desconocimiento impondría a cualquier país un mar-

ginamiento semejante al vivido por los países más pobres del África negra, de Haití o Nepal. En el caso particular de México, las nuevas tendencias de la redefinición del espacio internacional orientan a acentuar la integración económica con los Estados Unidos, por las razones obvias que se desprenden de su contigüidad geográfica y el poderío de Norteamérica, pero presuponen también una integración más avanzada al conjunto del capitalismo mundial.

La reestructuración internacional del capital no es una confabulación del FMI o los staff corporativos de Nueva York y Tokio contra los países pobres, como creen amplios sectores de la izquierda. Es más bien, una respuesta defensiva del capital en sus esfuerzos por superar su crisis histórica de rentabilidad, dentro de una dinámica similar a la que han seguido hasta ahora todos los grandes procesos de reestructuración internacional, desde el que tuvo su base en la revolución industrial, hasta aquéllos que lo sucedieron a lo largo del tiempo. Se trata de un esfuerzo que parte de los principales centros dinámicos del sistema más amenazados por la sobrecumulación y la irrupción de nuevas áreas competidoras; pero se extiende al mundo entero, en el contexto de la internacionalización creciente de los circuitos productivos, comerciales y financieros, sometiendo a los países que quedan relegados a un nuevo tipo de marginación tecnológica, económica y cultural.

Como todo proceso capitalista, la reestructuración conlleva el signo de la ofensiva contra el trabajo y la población desprotegida y la agudización de la competencia internacional, a costos sociales muy grandes para las regiones y países de menor capacidad concurrencial de respuesta. Pero también implica un enorme salto en la expansión mundial del capitalismo, la socialización del trabajo, la in-

ternacionalización de la vida económica política y cultural y la modernización de los hábitos de vida y patrones culturales. Las fuerzas productivas asociadas a nuevas técnicas o disciplinas (robótica, telemática, biogenética, etc.) y los procesos de trabajo basados en la automatización flexible, los equipos de trabajo y la revalorización de las calificaciones laborales y la calidad de las tareas, no sólo conlleva fuerzas destructivas y grandes asechanzas, sino también enormes potencialidades liberadoras para los pueblos y clases subalternas, en lo que constituye un desafío cuyo signo dominante final dependerá del curso de la lucha de clases.

La reestructuración capitalista mexicana, es una parte inseparable de ese proceso general y se halla regido, por lo tanto, por su misma lógica. Pero en la misma medida en que se da en el espacio nacional específico de México, se enfrenta con problemas y retos particulares y recoge las demandas y conflictos propios, determinados por la formación económica, social y política del país y las especificidades de su crisis. En términos económicos, la reestructuración abarca cuatro niveles principales: la reorganización de la propiedad y la empresa capitalista (consolidación de la oligarquía financiera y extensión de su poder a nuevos campos), la de los procesos productivos (reconversión industrial), la de las condiciones de integración al mercado mundial (exportaciones manufactureras) y la de la actividad económica del Estado y los servicios por él prestados (privatizaciones, intentos de racionalización de las empresas públicas, reformas universitarias y educativas, etc.). Pero también afecta a la organización política del Estado y sus mecanismos de funcionamiento y legitimación. Los avances del proceso de reestructuración son sumamente desiguales entre los diferentes niveles señalados y entre as-

pectos de los mismos. Pero a su vez, el impulso a las transformaciones mencionadas difiere de acuerdo a los intereses particulares de los diferentes agentes sociales de la modernización. En lo que hace a las fuerzas del capital, deben distinguirse por lo menos entre los proyectos de la gran burguesía financiera y bursátil, (CEE-Legorreta), de la tecnoburocracia estatal moderna (equipo de Salinas de Gortari) y de la burguesía empresarial media neoliberal (panismo) que concibe de diferente manera a cada una de estas cuestiones y a las relaciones entre la modernización económica y la política.

En términos generales puede decirse que el gran capital financiero ha logrado llevar adelante exitosamente su propia reorganización (nuevo mercado de capitales centrado en las casas de bolsa, saneamiento financiero de sus empresas, etc.), junto con la reconversión productiva de una gran parte de las mayores empresas industriales y su reorganización hacia la exportación o la centralización en sus manos de enormes masas de capital-dinerario por medio de las "fugas" de capital y la especulación cambiaria y bursátil. Ello le da una enorme capacidad de iniciativa y de presión sobre el gobierno. Por primera vez está en condiciones de negociar de igual a igual con el Estado (fuera del marco de las organizaciones corporativas) y desde una posición de fuerza, para tratar de imponerle sus propias condiciones en el plano económico, que consiste en lo fundamental en el respeto de sus áreas de poder e influencia, en la aceleración de la privatización y reorganización de las empresas públicas y el incremento de los estímulos a la exportación.

La tecnoburocracia estatal moderna trata de impulsar los objetivos ya señalados en los diferentes niveles, esforzándose por preservar en la medida de lo posible el control estatal sobre el conjunto del

proceso y refuncionalizar la acción del Estado y las relaciones corporativas con la sociedad. Para ello resulta clave que pueda reorientar globalmente la actividad estatal hacia nuevas áreas estratégicas como las tecnológicas, las educativas, las de comunicación, etc. Pero su debilidad estriba en que, a diferencia de lo que sucede con el capital financiero, no ha logrado hasta el presente realizar avances importantes en la modernización de las principales empresas públicas (principalmente PEMEX) o en el sistema educacional, resolver la agobiante crisis fiscal del Estado, ni —lo que es más grave— imponer claramente su autoridad sobre la oposición interna del PRI que se resiste a su proyecto modernizador.

Finalmente, en lo que hace a la burguesía empresarial neoliberal estructurada en torno al PAN, su proyecto modernizador privilegia en el plano económico la desregulación de la economía, la privatización de las empresas no estratégicas y la supresión del ejido, y pone su acento principal en la modernización política. A este nivel, plantea una transformación radical de la organización estatal, para dar lugar a una democracia burguesa liberal, que hace que su proyecto político, sea completamente opuesto al del PRI, y —al parecer— también distinto al de la gran burguesía financiera, que prefiere presionar al PRI para imponerle sus condiciones. Por lo demás, el proyecto panista es la antítesis misma de la modernización en numerosos campos de la vida social y cultural, como la educación o la familia, donde sostiene puntos de vista reaccionarios y patriarcales.

Hasta ahora, como hemos visto, el proceso restructurador está lejos aún de haber logrado sus objetivos, salvo a niveles aislados. Por lo mismo, su concreción exitosa supone necesariamente un largo camino preñado de obstáculos y conflictos eco-

nómicos, sociales y políticos que no eximen la posibilidad de un largo periodo de estancamiento económico y degradación social. Pero a pesar de ello, su direccionalidad constituye el rasgo dominante que tinte el conjunto de los principales acontecimientos de la vida nacional. Por esa razón, también constituye el marco general para ubicar las condiciones en que tiene lugar la lucha de clases.

3. Modernización y lucha de clases. Un intento de ubicación de las respuestas de la izquierda

Las consecuencias sociales de la modernización capitalista y las respuestas del movimiento socialista y revolucionario plantean un conjunto de complejos problemas que podrían sintetizarse en tres campos principales: a) el de la relación entre la modernización y la ofensiva del capital; b) el de la correlación actual de fuerzas en que se libra la batalla entre el capital y el trabajo; c) el de las respuestas programáticas y tácticas del propio movimiento socialista y revolucionario.

La primera cuestión ha sido muy confundida por los compañeros que tienden simplemente a identificar la modernización con la ofensiva del capital contra el trabajo y la población, hablando de un conjunto de consecuencias necesariamente regresivas en el plano social y autoritarias en el plano político (lo que algunos autores, llaman genéricamente “el nuevo patrón”). La realidad es que la ofensiva del capital contra el trabajo y la población por restablecer sus condiciones de rentabilidad, presupone la modernización, pero no se identifica necesariamente con ella ni en su contenido, ni en sus ritmos. A su vez la llamada modernización no tiene siempre la misma significación para los traba-

jadores ni debe siempre asimilarse a los objetivos restructuradores del capital.

Toda una amplísima gama de las iniciativas del capital contra el trabajo y nivel de vida de la población (caída del salario, desempleo e incrementos de la intensidad del trabajo no asociados al cambio tecnológico, reducción de la magnitud y calidad de los servicios sociales, etc.) son fenómenos en sí mismos distintos a la modernización y constituyen más bien una respuesta del capital y el Estado a la crisis y, en términos históricos generales, expresan la falta de modernización capitalista. No es casual que las ramas de la producción y regiones menos "modernizadas", sean al mismo tiempo las más afectadas por este tipo de catástrofe social, frente a lo que sucede en las industrias reconvertidas o en áreas reintegradas al mercado mundial o restructuradas (frontera Norte, Aguascalientes, Querétaro, etc.). En términos de ritmo, puede decirse, sin ninguna duda, que la ofensiva histórica del capital contra el trabajo, comenzó aproximadamente hacia 1976 (época del comienzo de la caída del salario), mientras que la llamada "modernización" lo hizo mucho después.

Sin embargo, como ha sucedido en la época de la revolución industrial, por ejemplo, y en todas las grandes transformaciones tecnológicas, las iniciativas modernizadoras del capital constituyen una parte fundamental de su ofensiva contra el trabajo, en la medida en que generan un nuevo tipo de desempleo (cierre de empresas y secciones tecnológicamente obsoletas, reducción de personal por introducción de sistemas automatizados, etc.), que destruyen las viejas calificaciones y tradiciones laborales o que imponen un nuevo tipo de intensificación del trabajo, generalmente asociado (en las actuales condiciones), a la mayor atención y calidad que esto re-

quiere. En algunos casos (cierre de plantas) tales medidas pueden tener consecuencias sociales catastróficas para amplísimos sectores de la población y regiones enteras. En la mayoría de los casos, generan una modificación de las condiciones de producción y trabajo, que también ofrecen nuevas posibilidades de recalificación laboral y de beneficios salariales y sociales o incluso de mayor posibilidad de control sobre los procesos de trabajo, las que podrían extenderse a otros sectores de la población, por la vía del incremento de la productividad y el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. El predominio de los aspectos negativos o positivos del proceso, dependerá, como siempre ha sido, del curso de la lucha de clases y, —como señala agudamente Benjamín Coriat— de que la modernización económica sea o no acompañada por una modernización social.

Esto lleva al hecho de que existe un amplio campo de modernización de la sociedad que no tiene nada que ver con la ofensiva del capital y muy poco con los propósitos "modernizadores" del capital, en la medida en que sólo será aceptado por éste por obra de la lucha de los trabajadores y del pueblo. Nos referimos a lo que genéricamente podríamos llamar modernización social, incluyendo la reducción de la jornada de trabajo, nuevas formas de seguridad social (por ejemplo, seguro del desempleo), la extensión de la educación, la investigación científica y la recalificación de los trabajadores, avances en los derechos civiles y laborales de la mujer, a la consideración de los problemas ecológicos, al desarrollo de la empresa cooperativa y la autogestión de sus diversas modalidades.

Por lo mismo, la resistencia a la ofensiva del capital no debería conducir al rechazo global a la modernización, ya que ésta abre posibilidades socia-

les económicas y políticas que pueden realizarse a través de la lucha social. Los sectores del movimiento popular que no comprenden esto, y que se limitan a la mera resistencia contra cambios inevitables, sin más bandera que la defensa del pasado no sólo serán históricamente derrotados, sino que también actuarán de hecho como aliados de las fuerzas retrógradas que están condenadas por el advenimiento de nuevos tiempos.

Planteada esta cuestión, se puede pasar a tratar de responder el segundo interrogante (la correlación actual de fuerzas). Para hacerlo, se debe partir del reconocimiento de que la situación más general es desfavorable a los trabajadores y al movimiento socialista y revolucionario más avanzado. A nivel mundial esto es muy claro, en los principales países industriales el capital ha logrado vencer la resistencia del movimiento sindical e imponer la reestructuración en condiciones muy favorables a sus intereses. Los principales países no capitalistas encabezados por la Unión Soviética y China, se hallan empeñados en una gran campaña reestructuradora que busca recoger gran parte de las iniciativas tecnológicas y administrativas de la modernización capitalista, e intentan simultáneamente una integración mucho mayor de sus economías en el mercado mundial capitalista y la atenuación de los conflictos político militares con el imperialismo. Las revoluciones afroasiáticas, en auge la década pasada (angoleña, mozambiqueña, etíope, afgana, iraní), están completamente empantanadas y atravesando una situación que no es mejor a la de la revolución nicaragüense. En pocas palabras, el movimiento socialista internacional se halla posiblemente en su época de mayor debilidad y crisis desde tal vez los años veinte.

A nivel nacional la situación no es mejor. La

clase obrera mexicana ha sido la más golpeada de toda América Latina en un proceso que lleva ya más de una década y no ha podido emprender acciones generalizadas de resistencia por hallarse inmovilizada por el control corporativo de sus organizaciones sociales. Sus organizaciones están divididas, socialmente aisladas y carentes de una visión y un programa que le permita incidir eficazmente en la coyuntura actual. Ello determina que la lucha social se haya desplazado hasta las últimas trincheras de la resistencia obrera y popular en los lugares de trabajo y que sus tareas prioritarias deben ser aquéllas relacionadas con los principios de la organización de esa resistencia y la preparación de una contraofensiva a largo plazo y no —como pretende cierta izquierda— con hacer llamados generales a la revolución o definir programas utópicos de gobierno.

La respuesta al tercer tipo de problema debe situarse en el contexto de lo señalado. Debe reconocerse que no está hoy planteada la posibilidad de una salida revolucionaria a la crisis, ni tampoco la de un gobierno socialista o revolucionario que emprenda reformas desde arriba. Las condiciones actuales de la lucha imponen la organización de la resistencia obrera y popular contra la ofensiva capitalista, a partir del desarrollo de una táctica realista que combine la defensa del salario y las condiciones de vida, desarrollo de condiciones para el estudio y trabajo con los avances hacia un nuevo programa alternativo que dé respuesta positiva a los desafíos económicos, sociales y culturales de la modernización. Este tipo de alternativa debe situarse en un terreno político claramente diferenciado del de la simple resistencia nacionalista, estatista y populista a la modernización, sin otro referente que la pura unidad de acción del movimiento popular y la coin-

cidencia en torno a demandas democráticas en abstracto. En el plano social inmediato, la defensa del empleo, el salario y las condiciones de trabajo y estudio, deben partir de la aceptación de la inevitabilidad del cambio tecnológico y la potencialidad histórica positiva de muchos de sus aspectos, luchando por redefinir las condiciones y espacios de trabajo (cuando ello fuese posible) y el contenido mismo de la actividad productiva. Los logros en esa dirección deben transferirse a la constitución de múltiples núcleos autónomos de avance y resistencia, capaces de sobrevivir, acumular fuerzas y desarrollar espacios democráticos de autorganización y gestión, que les permitan ir desarrollando una nueva práctica social y una cultura también nueva.

Junto a esa práctica, los sectores más consecuentes del movimiento socialista y revolucionario deben plantearse el salto hacia la actividad política amplia en el sentido indicado, señalando el significado de la crisis política, para procurar democratizar la sociedad mexicana y sus restituciones políticas (cuestión que veremos con más detalle en el apartado siguiente). No obstante, esto por sí sólo sería insuficiente y sólo podría favorecer a la oposición panista y nacionalista al régimen sin desarrollar ninguna nueva alternativa política de transformación social, si no va acompañado de esfuerzos en la dirección de la conformación de un nuevo proyecto revolucionario de transformación y modernización desde la base de la sociedad mexicana.

4. La crisis política y la apertura de nuevos espacios democráticos

Como ya vimos, el estallido de la crisis política es el nuevo factor que suma a la crisis económica y

social precedentes, para configurar una compleja situación de dislocamiento global de los patrones históricos de funcionamiento de la sociedad y el Estado. Sin embargo, esa crisis no se ha traducido aún en una fractura radical del bloque de poder ni es tampoco la expresión de la generalización de la protesta social y la incapacidad del régimen de dominación para contenerla. En términos de la tradición de análisis del marxismo, está muy lejos de ser una crisis revolucionaria, no sólo por los factores mencionados, sino también por la falta de un sujeto político capaz de canalizarla en una orientación de ruptura global del régimen de dominación existente. Más bien puede ser vista como una crisis de la modalidad del sistema de dominación, que abre posibilidades inéditas para la acción política de masas y la apertura de nuevos espacios de organización y conformación. Sin embargo, el aprovechamiento de estas posibilidades exige en el terreno del análisis resolver la cuestión de la naturaleza de la crisis y sus potencialidades, despejando la multitud de interrogantes que plantea.

Como quedó establecido, la causa más profunda del colapso que está sacudiendo al régimen priísta es la misma que explica la crisis económica, política y social. El trasfondo de todas ellas se encuentra en el agotamiento histórico de sus modalidades anteriores de funcionamiento, que han dejado atrás su momento de apogeo. Si a nivel económico la crisis estructural se deriva del conflicto entre las nuevas necesidades impuestas por la acumulación intensiva de capital, a nivel político es el resultado de la inadecuación del régimen autocrático-corporativo actual frente a las demandas de todo tipo planteadas por la maduración de la sociedad. El Estado surgido de la revolución, y consolidado a través de las reformas cardenistas y de más de tres déca-

das de desarrollo económico y social, respondió a necesidades políticas hoy superadas. Hizo posible el reparto de la tierra; la industrialización, urbanización y alfabetización básica del país; el desarrollo de un sistema de seguridad social y la conformación de una estructura de clases moderna. Durante muchas décadas el mismo pudo preservar la continuidad y estabilidad política, gracias a que logró establecer un determinado tipo de vinculación con la sociedad civil basada en la institucionalización del control corporativo y caciquil sobre la misma, el equilibrio entre los requerimientos de la prédica populista y la centralización de su poder, con el impulso tecnocrático a la industrialización y el establecimiento de un poder presidencial excepcionalmente fuerte y omnipresente, exento de toda crítica.

El Estado surgido de la revolución, las reformas y la industrialización adoptó así una peculiar configuración política sustentada en un poderoso aparato burocrático presidencialista, vinculado a la sociedad por relaciones corporativas, en las que las normas constitucionales de tipo democrático-burgués (régimen de partidos, división de poderes, sufragio efectivo, vigencia de la legalidad, etc.) sólo eran reconocidas formal y accesoriamente. El nexo entre todas estas instituciones, fue el establecimiento de un partido de Estado subordinado al poder presidencial, cuya principal función consistió en centralizar el susodicho control corporativo. Las elecciones para conformar los poderes ejecutivos y legislativos de la Unión y los gobiernos estatales y municipales fueron administradas por la Secretaría de Gobernación y el PRI, mediante un régimen electoral suigeneris, que excluirá, de hecho, de la participación a casi la mitad de la población en edad de votar, que sólo tenía en cuenta los votos emitidos

como una demostración inicial de fuerzas, que debía luego validarse en las duras negociaciones post-electorales que precedían a la adjudicación final de cargos por la Justicia Electoral oficial, siempre con el PRI como el ganador absoluto. El fraude electoral sistemático apareció así como un medio para subordinar y estatizar a los partidos de oposición y para preservar para el PRI el control monolítico de prácticamente todas las instituciones estatales, más que como medio para asegurar su triunfo (ya que éste no necesitaba de aquél para continuar siendo el partido gobernante, pues seguía siendo una fuerza política hegemónica dentro de la sociedad).

Dentro de este sistema, las organizaciones populares de masas quedaron absorbidas dentro del aparato corporativo y la izquierda tendió a polarizarse entre una vertiente estatista (integrada de una manera u otra al aparato estatal y corporativo) y otra contestaria, que se desempeñaba en los intersticios no controlados por el Estado luchando siempre por sobrevivir por medio de prácticas de oposición radical y contestaria al conjunto del sistema. Estas prácticas no sólo eran expresión de su falta de desarrollo, también eran muestra de la comprensión instintiva, por lo demás correcta, de la farsa que representaban los procesos electorales en México, precisamente por las características antes señaladas.

Imposibilitada de desarrollar una verdadera práctica política independiente, en el sentido de definición de un proyecto político alternativo para toda la sociedad, la izquierda estatista tendió a reproducir las propias ideas priístas, limitándose a señalar la inconsecuencia gubernamental, o radicalizando sus propuestas prácticas al interior de los sindicatos y de las organizaciones populares que controlaba.

La crisis de este régimen todopoderoso, desde otro ángulo, fue el resultado, paradójicamente, de sus éxitos anteriores, en lo que podemos caracterizar como la primera modernización de la sociedad mexicana (años cuarenta a setenta). Esto implicó el surgimiento de una burguesía empresarial y financiera moderna, la conformación de una verdadera clase obrera urbanizada, culta y diversificada, de nuevas capas medias independientemente del aparato estatal. Asimismo, de una pequeña y mediana burguesía agraria completamente subordinada a los requerimientos del mercado y de una nueva intelectualidad democrática y moderna. En la medida que los requerimientos objetivos de la acumulación intensiva chocaron cada vez más fuertemente contra las supervivencias, sociales, institucionales y culturales de la economía cerrada y burocratizada, las fracciones "modernas" de las diversas clases de la sociedad mexicana comenzaron a rebelarse contra el corporativismo, el fraude, el centralismo que trajeron consigo los distintos regímenes priístas, consumados en la impresionante escala de corrupción del boom petrolero de López Portillo. La crisis económica subsiguiente, como sabemos ahondaría este descontento. Sin embargo, no sería la izquierda la que se colocaría a la cabeza de la protesta política, sino el principal partido de derecha, el PAN, que comenzó un sostenido proceso de independización de la tutela del Estado (el llamado neo-panismo) y a encabezar la lucha contra el fraude, el corporativismo, el centralismo presidencialista y la corrupción oficial. Las elecciones de Chihuahua de 1985 desbordarían completamente los tradicionales parámetros electorales (votación-fraude, protesta moderada-negociación) y desencadenarían un tipo de movilización cívica de masas desconocida en la política mexicana reciente. Desde entonces

se desencadenaría la crisis del régimen político.

A esta primera causa y elemento desencadenante de la crisis estatal, se le sumó en 1987 la crisis interna del propio PRI y el desprendimiento de parte de su izquierda nacionalista. Sin embargo, aun cuando este otro factor (decisivo en la configuración de la crisis) tiene algunos elementos en común con el anterior, su dinámica obedece a razones distintas y —en algunos aspectos— opuestas. La razón inmediata de la crisis interna del PRI, se halla en los desequilibrios provocados por el surgimiento en su interior del proyecto modernizador-tecnocrático encabezado por Salinas de Gortari, (que como tal constituye un intento de respuesta a la crisis de fondo del Estado) y la imposición de la candidatura de este último para la sucesión presidencial, por una decisión del actual presidente, resentida y resistida por una clara mayoría del partido. La significación interna de esta decisión, fue mucho más que una cuestión de procedimiento, ya que el presidente De la Madrid no hizo otra cosa que ejercer sus atribuciones de gran elector como jefe del partido y el Estado. Lo que estaba esta vez en juego eran los intereses materiales de los sectores más conservadores de la burocracia estatal, el aparato charro-caciquil y la burguesía burocrática tradicional, amenazados por el intento salinista de reducir su influencia económica y política. En el contexto se encuentra un intento de redefinición del bloque de poder para reforzar el papel de fuerzas sociales más dinámicas (aunque menos presentes en el aparato oficial) como la nueva oligarquía financiera-bursátil, la nueva intelectualidad moderna o emergente, líderes reformistas del movimiento sindical (del tipo de Hernández Juárez o Jorge Sánchez), del movimiento campesino, colonos, mujeres o ecologistas. Lo desconcertante de esta situación consistía en que el proyecto salinis-

ta entraba en confrontación directa, en el plano ideológico y de lucha, por posiciones dentro del aparato burocrático, con la fracción nacionalista-cardenista de la izquierda del PRI, que cuestionaba frontalmente la política económica oficial de apertura externa, privatizaciones y pago de la deuda. Por esa razón, la resistencia a la candidatura de Salinas se centró en un núcleo principal, estructurado en torno a la candidatura de Del Mazo y mayoritario dentro de las fuerzas corporativas del partido (que limitaba la modernización al plano de la reconversión industrial) y otro más pequeño, compuesto fundamentalmente por intelectuales y funcionarios nacionalistas (la Corriente Democrática), que apeló a procedimientos democráticos, pugnando por la elección interna del candidato por la base del partido. La imposición de la candidatura de Salinas abrió una nueva fase dentro de este conflicto sordo al interior del PRI ya que concluyó por contraponer al sector modernizante o eficientista con el bloque corporativo, aun cuando parte de esa disputa se zanjó temporalmente con el sempiterno reparto de diputaciones.

Pero al mismo tiempo tuvo lugar la ruptura de la Corriente Democrática y de los partidos apéndice del PRI (PARM, PFCRN y PPS), que condujo a la proclamación de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional (FDN), que apareció tratando de capitalizar en su favor el gran descontento social, apelando a la vieja tradición cardenista.

La constitución del FDN y la proclamación de la candidatura presidencial de C. Cárdenas, traslada de esta manera al exterior del PRI lo que anteriormente había sido un conflicto interno y de hecho entra al campo de la confrontación electoral abierta en la que ya se encontraba el PAN y una parte de la izquierda, para configurar una nueva realidad po-

lítica. El partido de Estado tiende a quedar cercado entre dos grandes fuerzas electorales que cuestionan su preeminencia y que (en conjunción con los votos de la izquierda tradicional) amenazan dejarlo en minoría relativa y forzarlo a reconocer la nueva realidad (respeto al voto, sistema tripartidista, relajamiento de los controles corporativos, etc.). Esta situación que dejaría obsoleta la Reforma Política de Reyes Heróles, sólo podría neutralizarse por el PRI por medio de un gigantesco fraude electoral y el endurecimiento del sistema político. Esta última alternativa no solamente agravaría la crisis actual, sino que tendría consecuencias económicas muy graves en términos de confianza de los capitalistas y fugas de capitales, en la medida en que comprometería la estabilidad política y la seguridad social tradicionales.

El Estado mexicano sólo podrá superar su crisis en la medida en que logre establecer un nuevo equilibrio entre las diversas clases y fuerzas sociales, basada en una redefinición del bloque de poder y las condiciones de su hegemonía. En última instancia ello está condicionado por la superación de la crisis económica a partir de los avances del proyecto modernizador, lo que supone un periodo de varios años durante los que probablemente existirá una amplia movilidad política, que puede dar lugar a más de una alternativa (redefinición de la hegemonía priísta, pasaje a un sistema estable multipartidista, triunfo del PAN, endurecimiento represivo), con diversos niveles de apertura política y social. La alternativa y modalidad política que termine por imponerse, dependerá de la correlación de fuerzas que se establezca en el proceso mismo. Pero ésta, a su vez, estará en gran medida condicionada por los resultados de las elecciones y la relación de fuerzas que se establezca.

Dentro de esa perspectiva, el surgimiento de la candidatura de Cárdenas constituye un fenómeno positivo, en el doble sentido de que tiende a debilitar el control corporativo del PRI sobre importantes sectores de la población trabajadora, (en la medida en que canalice la protesta popular) y por reforzar substancialmente el campo de las fuerzas que luchan por el respeto al voto y la eliminación del fraude electoral (es interesante destacar el hecho de que precisamente los partidos "paleros" que más se beneficiaron hasta ahora del fraude sistemático como, el PPS, el PARM, o el anterior PST —en la medida en que se han sumado al FDN— que se ven forzados hoy a levantar la bandera de la limpieza electoral). Se trata de aspectos que no tienen que ver directamente con su proyecto nacionalista-populista y el carácter más o menos progresista del propio candidato y las fuerzas políticas que lo apoyan, y que también se dan en buena medida en torno al voto al PAN en muchas regiones.

Para la izquierda socialista, la crisis política y la nueva naturaleza que tienden a adquirir los procesos electorales, se traducen en un conjunto de nuevos desafíos que se suman a los impuestos por la modernización capitalista y la crisis económica y social. Las nuevas condiciones de la lucha de clases requieren conjugar la organización de la resistencia popular a la ofensiva del capital con el desarrollo de nuevas tácticas y demandas programáticas. Los avances de la reconversión industrial y la automatización, del trabajo "informal" o del desarrollo del capitalismo en el campo, junto con la proletarianización del trabajo femenino, las tendencias hacia la descalificación-recalificación de la fuerza de trabajo o la contaminación ambiental, requieren un cambio de terreno en múltiples campos de la lucha social y cultural. Pero la crisis política, también plantea

nuevos desafíos que el movimiento obrero y popular tiene la obligación de responder. El primero de ellos tiene que ver con su capacidad para transformar la protesta social en participación electoral, desechando las actitudes abstencionistas que aún predominan en amplísimos sectores de la población y la propia izquierda. El segundo, está dado por el lugar que pueda ocupar en la defensa unitaria y activa del voto de todos los votantes y partidos. Esto supondrá el abandono de anteriores concepciones mezquinas de la participación electoral, que se veía, principalmente como instrumento para obtener posiciones negociadas en las Asambleas legislativas y recursos monetarios en beneficio de los diferentes partidos. Finalmente, la apertura de procesos electorales mucho más amplios y potencialmente democráticos, plantea la necesidad de tomar en serio la construcción de instancias amplias y unitarias de participación, que trasciendan los pequeños frentes. Esta necesidad es tanto más fuerte, cuanto que la burguesía neoliberal ha pasado a encabezar de hecho al movimiento democrático opositor en el país, y la alternativa más viable a la misma tiende a ser cubierta por la oposición nacionalista.

De lo que se trata ahora es de pasar al terreno de la lucha política; pero no para reforzar aparatos o liderazgos locales neocaciquiles, sino para democratizar la sociedad, y sus instituciones políticas, abrir nuevos cauces al movimiento popular y comenzar a plantearse la construcción de una nueva alternativa revolucionaria y socialista para el país.

Postscriptum

Encontrándose en prensa el documento que antecede, se conoció la declinación de la candidatura presi-

dencial de Heberto Castillo en favor de Cuauhtémoc Cárdenas y la suscripción de una alianza política entre el Partido Mexicano Socialista y la Corriente Democrática. Tales hechos tienen una significación que no cabe soslayar, dadas las siguientes consideraciones.

El acuerdo político contribuye a resquebrajar la hegemonía priísta, representa un avance en la perspectiva de un candidato único de las fuerzas democráticas y de izquierda y en la concreción de los objetivos políticos planteados en el presente documento para la actual coyuntura electoral. Es necesario destacar que el acuerdo PMS-CD fortalece el polo democrático de la oposición nucleada en torno a la candidatura de Cárdenas, provocando un desplazamiento de ésta hacia la izquierda, y, consiguientemente, debilita al conformado por los partidos paraestatales que integran el Frente Democrático Nacional. Asimismo, si bien el acuerdo favorece electoralmente a Cárdenas e incrementa las posibilidades de los restantes candidatos del PMS, en lo político se fortalecen las tendencias organizacionales de corte socialdemócrata. Tal perspectiva deberá combatirse fortaleciendo tanto el análisis y debate teórico como las instancias orgánico-políticas del movimiento socialista.

De entre los puntos programáticos propuestos por el PMS, asumen capital importancia los siguientes: 1) "Ambas organizaciones se comprometen a eliminar el sistema presidencialista y el corporativismo, sustentos principales de la antidemocracia en el país, . . ."; 2) "En el nuevo régimen no habrá partido oficial, las organizaciones no podrán ser incorporadas a ningún partido ni el Estado podrá entrometerse en su vida interna, . . ."; 3) "Si no logra el triunfo electoral (el candidato común), ambas organizaciones se mantendrán en la oposición, . . .".

Textos que no presentan ambigüedades, y cuya exigencia de cumplimiento es presupuesto indeclinable para articular opciones políticas que permitan a las masas mexicanas sacudirse el doble tutelaje a que las someten el Estado y el partido dominante.

No obstante lo anterior, es imprescindible afirmar que el acuerdo no rompe los moldes nacionalistas, además de encontrarse rasgos de fuerte contenido estatista y de verticalismo. Tampoco se propicia la participación política autónoma de los trabajadores en todos los niveles de la sociedad, aspecto que corresponde reivindicar plenamente en la dirección de ganar espacios y democratizar ámbitos políticos de la vida nacional, objetivos irrenunciables en cuya materialización se ligan y crean perspectivas hacia un futuro socialista para México. Cabe aclarar que al firmarse el acuerdo las propuestas originales del PMS sufren algunas modificaciones, en particular, de las aquí señaladas, la referida al sistema presidencialista; modificaciones que, en este caso, si bien no llegan a provocar que se pierda el sentido original sí debilitan significativamente la fuerza política del planteo, lo que constituye expresión de las vacilaciones y limitaciones de la Corriente Democrática. A su vez, es importante manifestar un rechazo a los métodos personalistas y antidemocráticos seguidos por Heberto Castillo para renunciar a su candidatura.

Se debe enfatizar que la lucha por la democracia va a ser componente fundamental en la batalla política de los años futuros. Las próximas elecciones se enmarcan en esa lucha y tienen que servir para avanzar en la conformación de alternativas populares, democráticas y revolucionarias. En este sentido, el voto a la presidencia por Cuauhtémoc Cárdenas por vía del PMS, conlleva hoy una poten-

cialidad nueva que debe ser aprovechada. Depositar un voto por tal candidatura crea mejores condiciones para avanzar en la democratización del país, por impulsar la organización popular independientemente y la lucha por el socialismo.

En consonancia con lo anterior, en las elecciones de Senadores, Diputados y Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, un voto por los candidatos del Partido Revolucionario de los Trabajadores o del Partido Mexicano Socialista, eligiendo aquéllos que en el transcurso de la campaña se hayan pronunciado más enérgicamente por la democracia y el socialismo, y por la defensa intransigente del

voto, refuerza el avance en la anterior perspectiva.

Por último, la posición electoral del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de Rosario Ibarra de Piedra, de mantener su propia candidatura a la presidencia, se considera un error político en las actuales condiciones. Pero ello no debe conducir a su descalificación, ya que la postura de Rosario, de la militancia perretista y de la Unidad Popular expresa, en gran medida, la justificada desconfianza de un amplio sector de la izquierda radical frente a la trayectoria y compromisos pasados de la mayor parte de los miembros de la Corriente Democrática y del Frente Democrático Nacional. 🗳️